

Palabras preliminares

En el momento en que firmamos estas líneas, en octubre de 2019, se discute todavía muy ásperamente sobre lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. En la prensa se dice de muchas maneras que lo que indican los informes publicados hasta ahora es mentira, y el gobierno ha ofrecido una nueva investigación, que debe comenzar “desde cero”. Eso quiere decir que es probable que en el futuro haya información nueva, acaso distinta, y a partir de ella una explicación diferente de los hechos.

Desde luego, es posible que esa nueva información sea bien recibida. Pero parece poco probable que el episodio se llegue a aclarar de modo definitivo, con una explicación que deje conformes a todos. En cualquier caso, la masacre de Iguala es ya un hito en la vida pública mexicana del nuevo siglo, un término de referencia con una enorme carga moral. Mejor dicho, no la masacre de Iguala, sino el acontecimiento que llamamos “Ayotzinapa”. La diferencia no es insignificante: de eso se tratan las páginas que siguen.

Éste no es un libro sobre los sucesos de Iguala. No podemos decir nada nuevo sobre lo que ocurrió esa noche, no sabemos nada más que lo que se ha publicado. Y nos ocupamos sólo de eso, de lo que se ha publicado. Es decir, que no nos referimos a los hechos, sino a la información disponible sobre los hechos, no a lo que sucedió, sino a las interpretaciones acerca de lo que sucedió. No a Iguala, sino a “Ayotzinapa”.

Los hechos de Iguala fueron elaborados en los medios de comunicación, en el espacio público. Y allí adquirieron sentido. Queremos entender cómo sucedió eso. Toda interpretación remite a los hechos, pero siempre va más allá de los hechos, los pone en un contexto particular, que les confiere un significado. No es lo mismo que un episodio se sitúe en el contexto del crimen organizado o que se sitúe en el contexto de la represión política. Y no hay nada automático en esa alternativa.

Más que cualquier otro, este libro es producto de una conversación. Mejor dicho, es una conversación. En primer lugar, por supuesto, una larga, sostenida, apasionante conversación entre quienes firmamos. Pero también la conversación más larga, más amplia de nuestro círculo de Chimalistac; por eso, gracias a María, Esteban, Iván, Rodrigo, Frida, Claudio, Celia, Miguel, Gibrán, Natalia, Héctor, Rainer, Verónica, Rogelio, Estela, Franco, Alejandra, Juan Pedro, Mauricio, Antonio, Julio, María Fernanda, Fiacro, Jorge, Gauri, Marco, y desde luego gracias a Javier.

FERNANDO ESCALANTE GONZALBO
y JULIÁN CANSECO IBARRA
Ciudad de México,
9 de octubre de 2019

El 15 de julio de 1943, en el Parque José Santos Chocano de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, fue asesinado de 19 puñaladas el boxeador retirado Francisco A. Pérez, conocido como *Mamatoco*. Pérez había sido entrenador deportivo de la Policía Nacional, y era una figura menor de la segunda fila de la política colombiana, editaba el semanario *La Voz del Pueblo*, que sobre todo se ocupaba de asuntos de la policía, y había pasado una temporada en la cárcel por su participación en el proyecto de golpe de Estado del general Eduardo Bonitto, en 1941.

En las semanas siguientes la prensa se hizo eco de numerosos rumores y especulaciones acerca del asesinato de *Mamatoco*. La prensa conservadora, en particular el diario *El Siglo*, de Laureano Gómez, habló de una conspiración y apuntó directamente al presidente de la república, Alfonso López Pumarejo. Se dijo que el presidente había ordenado el asesinato de Pérez para evitar que publicase noticias escandalosas de la familia presidencial; se habló de la relación de uno de los hijos del presidente con la esposa de un diplomático; se dijo también que *Mamatoco* investigaba la muerte de un carabinero que había sido asesinado cuando descubrió a un hijo del presidente en un automóvil, con una mujer de la alta sociedad bogotana. A partir de eso, Laureano Gómez denunció el asesinato como un “crimen de Estado” y decidió que en la primera plana de *El Siglo* apareciese todos los días la misma frase: “¿Quién mató a *Mamatoco*?”

Los rumores no tenían ningún fundamento. No había ninguna relación sentimental que ocultar. El carabinero del que se hablaba había sido baleado por un grupo de asaltantes cuando acudió a prestar ayuda al ciudadano José María Castro Montejo. Pero no hacía falta ninguna prueba para hacer creíble la idea de la conspiración; su verosimilitud dependía de otras cosas. En parte estaba la habilidad retórica de Laureano Gómez, su capacidad para imaginar conspiraciones convincentes,¹ pero eso era sólo una parte.

La investigación judicial descubrió algo mucho más prosaico, menos atractivo, mucho menos escandaloso: el mayor Luis Carlos Soler Hernández, de la Policía Nacional, había ordenado el asesinato para evitar que se hicieran públicos los malos manejos administrativos de los que era responsable. Y se encargaron del asesinato materialmente el subteniente Santiago Silva y los agentes de policía Rubén Bohórquez y Oliverio Ayala. *El Siglo* no se movió un milímetro, siguió preguntando lo mismo, todos los días: “¿Quién mató a *Mamatoco*?”

Obviamente, la pregunta era una acusación. Los lectores tenían que suponer que ya se sabía quién lo había matado, pero que se ocultaba. Sólo hacía falta eso, repetir la pregunta, para desacreditar la investigación, las pruebas, el juicio, y multiplicar las sospechas con cada día que pasaba: que se diese por resuelto el caso era una prueba más de la conspiración, el hecho de que se señalase tan sólo a unos cuantos policías era una prueba adicional en contra del presidente. Y así, la neutralidad del lenguaje periodístico, el distanciamiento escéptico, se convierte en recurso de denuncia.

En los meses que siguieron, la acusación se mezcló con varias otras, sobre los negocios de otro de los hijos del presidente, Alfonso López Michelsen, sobre los arreglos de la

casa de descanso del presidente, llamada Las Monjas, y con cada nueva imputación pesaba más la sospecha.² El asesinato de *Mamatoco* se convirtió en un símbolo de la corrupción y el abuso de poder. Finalmente, López Pumarejo se vio obligado a presentar su dimisión el 25 de junio de 1945.

En sí mismo, el asesinato de *Mamatoco* no tenía mayor importancia, porque Francisco Pérez no era un personaje notable. Se volvió importante por la serie de hechos a que dio lugar el asesinato.³ Se volvió importante porque sirvió para condensar en una imagen una miríada de acusaciones. Y eso es lo que nos interesa subrayar, porque el caso puede servir como modelo.

Laureano Gómez tenía una especial capacidad retórica para dar resonancias terribles a sus acusaciones e imaginación para fabular elaboradas tramas de corrupción:

La mayoría de los ataques de Gómez eran personales, como su acusación de que López, en la construcción del nuevo conjunto de la Universidad Nacional [...] había especulado con los terrenos. Su especialidad era montar escándalos laberínticos, muchos de ellos, mirados desde ahora, triviales y aun incomprensibles, pero pocas de sus víctimas osaron enfrentarlo en el congreso. Para sus seguidores era un ídolo incorruptible.⁴

Pero la verosimilitud de sus acusaciones no era sólo producto de su imaginación: estaba construida culturalmente. La suspicacia respecto a la versión oficial del homicidio de *Mamatoco*, por ejemplo, y la importancia que adquirió un caso como ése, muy menor, fueron producto de una serie de mediaciones que permitían interpolar lo nacional en lo personal y que convirtieron el hecho en un acontecimiento.

Siendo relativamente insignificante, *Mamatoco* como víctima podía ser todas las víctimas. Inscrito en la lógica de la corrupción, del abuso de poder, su asesinato adquirió un valor simbólico como prueba material, concreta, de la maldad del presidente.

La eficacia de la acusación consistió en remitir el hecho a un espacio oculto, secreto, donde se mueven los poderosos. En los años treinta, dice Herbert Braun, el auge económico, la nueva riqueza, comenzaron a hacer sospechosos los negocios de los políticos: “Lenta pero claramente, los *convivialistas* [liberales y conservadores] comenzaron a retirarse de las plazas públicas. La política se hacía en círculos cerrados, en el Jockey Club o el Club de Tiro, donde podían comentar abierta y francamente sus animosidades públicas.”⁵ En ese ambiente, las tramas ocultas eran más verosímiles que las explicaciones abiertas, documentadas. La culpa del presidente resultaba creíble precisamente porque no había pruebas. Por eso la luz que podían arrojar la investigación y el procedimiento judicial era inútil, incluso contraproducente, porque aparecía como una nueva pantalla para mantener oculta la verdad.

La historia de *Mamatoco* era una nueva escenificación de una historia muy simple, muy antigua: los poderosos conspiran en secreto para mantener su poder.